

Certifico que alegó por el recurso el abogado Julio Loayza Sáez. San Miguel, 12 de julio de 2024. Pablo Burchard Maureira, relatora.

San Miguel, doce de julio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 9: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Julio Loayza Sáez, en representación de Felipe Maldonado Medina y Katherine Canales Mella, para interponer acción constitucional de amparo en contra de la resolución de 27 de noviembre de 2023, dictada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la decisión que negó la solicitud de pena sustitutiva respecto de los amparados, lo que entiende vulnera su garantía de libertad personal y seguridad individual.

Explica que la recurrida resolvió sin revisar el fondo ni el informe de la juez *a quo* en que se plasmó una confusión ya que se habría aplicado la norma del artículo 17 letra c) de la ley 18.216 en un caso en que no procede.

Señala que, respecto de los amparados, el 30 de octubre pasado se celebró audiencia de procedimiento abreviado ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT N°3733-2022, instancia en que fueron condenados a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, no existiendo objeción del Ministerio Público en cuanto a que ésta se cumpliera a través de pena sustitutiva de libertad vigilada, sin embargo, el querellante se opuso a esta forma de cumplimiento. Refiere que el juez no accedió a lo solicitado por la defensa fundando su resolución en el artículo 17 letra c) de la ley 18.216 que hace referencia a un informe de plan de intervención que se confecciona una vez otorgada la pena sustitutiva el que tiene distintos requisitos y elementos respecto de aquellos destinados a la obtención de dicha forma de cumplimiento, por lo que a su juicio se vulnera lo preceptuado en el artículo 36 del Código Procesal Penal toda vez que el juez no fundamentó adecuadamente su resolución, aplicando erradamente una norma y exigiendo requisitos que la ley no contempla para la situación sometida a su conocimiento.

Sostiene que la alegación de falta de fundamentación la enarboló en segunda instancia ante la recurrida, la que confirmó la resolución de primera instancia sin fundamentarla, infringiendo a su vez el artículo 36 del mismo cuerpo legal y el derecho al debido proceso del que es titular el amparado.

Solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se guarden las formalidades legales, adoptándose de inmediato la providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y la debida protección a los amparados especialmente, ordenando que se otorga la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y consiguientemente la inmediata libertad de los amparados.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLXXXXVNT

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña Lilian Sáez Lemari, Juez subrogante del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que el 30 de octubre de 2023 en la causa RIT N°3733-2022, la magistrado Carolina Gajardo dictó sentencia en procedimiento abreviado respecto de los amparados, por el delito de robo con violencia, condenando a cada uno a la pena de cinco años de presidio menor en grado máximo, accesorias legales, comiso de especies, toma de muestra de ADN, sin costas, no concediéndosele pena sustitutiva para su cumplimiento, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, ingresando como rematados los amparados el 5 de diciembre de 2023.

Tercero: Que informa doña Erika Villegas Pavlich, Ministra suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago, refiriendo que la causa materia del recurso se revisó bajo el Ingreso Corte N°5689-2023 por apelación de la defensa de los amparados respecto de la parte de la resolución que no les concedió a los amparados la pena sustitutiva de libertad vigilada, tras lo cual se decidió por unanimidad, confirmar, en lo apelado, la sentencia que no concedió penas sustitutivas a los sentenciados, estimando que no se cumplen los requisitos legales para su procedencia. Lo anterior, por compartir los argumentos de la sentenciadora a quo y, además, considerando lo dispuesto en el artículo N° 15, inciso 2 de la Ley N° 18.216 y, en particular atendido el móvil, la naturaleza del ilícito, el monto de lo defraudado y la calidad de funcionarios públicos que detentaban las personas acusadas.

Agregan que la sentencia impugnada, en el resolutivo II, señaló: “Respecto de ambos acusados, por los fundamentos motivados previamente, particularmente que no se han acompañado antecedentes suficientes que permitan presumir que la pena sustitutiva será suficiente para disuadirlos de la comisión de nuevos delitos y estimando que no se cumplen con los requisitos legales para ello, no se conceden beneficios para el cumplimiento de la pena impuesta debiendo cumplir la misma efectivamente, sirviendo de abono el tiempo que han permanecido privados de libertad en esta causa”.

Respecto de la admisibilidad del recurso de amparo cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en ingreso N°76.433-2020.

Cuarto: Que, el artículo 21 de la Constitución Política de la República establece que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.



Agrega su inciso tercero que el mismo recurso podrá ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Quinto: Que por la presente vía, se ha denunciado como ilegal y arbitraria, la resolución dictada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 27 de noviembre de 2023, que resolvió confirmar en lo apelado la resolución dictada por el 1º Juzgado de Garantía de Santiago, que negó la pena sustitutiva solicitada por la defensa de los amparados.

Sexto: Que del mérito de los antecedentes se colige que la resolución que se impugna por esta vía fue dictada por un Tribunal de la República, dentro de sus facultades legales y órbita de su competencia, previo debate y debidamente fundamentada, sin avizorarse ilegalidad alguna en dicha decisión, por lo que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de amparo deducido en favor de **Felipe Maldonado Medina y Katherine Canales Mella**, en contra de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°521-2024 Amparo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLXXXXVNT

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministro Carlos Cristobal Farias P., Ministro Suplente Alondra Valentina Castro J. y Abogada Integrante Patricia Alejandra Muñoz G. San Miguel, doce de julio de dos mil veinticuatro.

En San Miguel, a doce de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLXXXXVNT